

Téllez Patarroyo, I. (2025). De los Acuerdos de Paz de 2016 a la Paz Total en Colombia: Algunas reflexiones siete años después. En A. B. Benalcázar (Coord). *Enfoques Interdisciplinarios en Ciencias Sociales. Análisis de Problemáticas Contemporáneas (Volumen II)*. (pp. 76-88). Religación Press. <http://doi.org/10.46652/religacionpress.294.c495>



Capítulo 4

De los Acuerdos de Paz de 2016 a la Paz Total en Colombia: Algunas reflexiones siete años después

Ivonne Téllez Patarroyo

Resumen

La Paz Total es una propuesta política y constituye uno de los pilares de la estrategia del actual gobierno colombiano (2024). Es uno de los ejes transformadores que permitirá transitar hacia una sociedad segura, en el marco de una Paz estable y duradera, con garantías de no repetición. La Paz Total está fundamentada en el concepto de Seguridad Humana que establece que la seguridad está compuesta por políticas sociales económicas, culturales y de seguridad estatal que otorguen supervivencia y dignidad a toda la población en igualdad de condiciones. Esta estrategia es un objetivo nunca antes planteado en Colombia que integra a todos los actores armados ilegales en un espacio de diálogo directo y transformador. Esta estrategia de seguridad establece dos vías: la negociación y la sujeción a la justicia con los disidentes, así como también la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016. No obstante, la implementación de la Paz Total continúa difusa por la resistencia de algunos sectores de la población, por una planificación que no se presenta totalmente clara, y que, pese a que ha habido avances positivos, el ambiente de inseguridad permanece en algunas regiones. Ante este panorama es necesario reflexionar sobre el contenido de la propuesta, los avances y los retos que enfrenta, para ello, este trabajo emplea un análisis cualitativo de las variables identificadas.

Palabras clave:

Colombia; Paz; seguridad humana; Acuerdo de Paz.

Introducción

La Paz Total representa el eje principal de las transformaciones propuestas por el gobierno colombiano actual (2022-2026) con el objetivo de asegurar la seguridad y el bienestar de todos los habitantes del país. Esta política se posiciona como prioritaria y transversal en todos los asuntos de Estado, buscando alcanzar una Paz estable y duradera con garantías de no repetición y seguridad para todos los ciudadanos. Se concibe como la suma de acuerdos de paz con los grupos armados, junto con una visión de seguridad que se aleja de enfoques militares tradicionales, centrándose en la transformación de las condiciones sociales y económicas de las comunidades (Preciado, 2023).

De esta forma, el presente ensayo utiliza métodos y técnicas que exploran, comprenden e interpretan el fenómeno de la Paz Total en profundidad, con especial atención en aspectos subjetivos y contextuales.

La Paz Total es un concepto, es una propuesta política y es además, política pública en territorio colombiano. De esta forma, parte del concepto amplio de la Seguridad Humana, abarcando políticas sociales, medioambientales, económicas, culturales y de seguridad pública, con el fin de asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de las personas. Se propone superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y poner fin a las violencias armadas, tanto de origen sociopolítico como lucrativo. El gobierno propone un nuevo paradigma de seguridad que prioriza la protección de las libertades fundamentales y los derechos humanos, promoviendo una vida digna para todos los ciudadanos. Esta política tiene el potencial de transformar de manera multidimensional los territorios más afectados por la violencia (Preciado, 2023).

Los ejes transformadores de la Paz Total incluyen el diálogo como estrategia para poner fin al conflicto, el desescalamiento de la violencia, la transformación del territorio para reducir las brechas sociales y atender las necesidades socioeconómicas, la implementación del Acuerdo de Paz y la promoción de una cultura de paz.¹

A pesar de los avances logrados, se reconoce que ningún proceso de paz es perfecto y que la paz es un proceso en constante evolución. En Colombia, el conflicto ha sido una realidad constante a lo largo de la historia del país, desde las poblaciones precolombinas hasta la actualidad. Aunque se han alcanzado hitos importantes, como el proceso de paz con las FARC-EP a partir de 2011, persisten desafíos significativos en la implementación de la Paz Total.

La búsqueda de la paz ha atravesado etapas complejas, desde la lucha por la emancipación de los criollos frente a los españoles, pasando por el pacto bipartidista

1 Ley 2272 de 2022

entre Liberales y Conservadores, hasta la promulgación de la Constitución Política de 1991 como respuesta a la profunda violencia política y social generada por el narcotráfico. Hasta el año 2011, Colombia no había experimentado un proceso de paz exitoso. Fue a partir de entonces, con las negociaciones con las FARC-EP, cuando el país pudo comprender en profundidad los desafíos y las oportunidades de sentarse a dialogar con un grupo armado al margen de la ley (Buendía, 2022).

Los antecedentes más relevantes de la búsqueda de paz en Colombia se remiten a 1980 desde cuando el país vivió varios intentos de pacificación con grupos insurgentes y actores armados que fracasaron por diversas razones. Estos procesos fallidos reflejan la complejidad del conflicto interno colombiano, la falta de consenso entre las partes y las dificultades para implementar acuerdos duraderos. A continuación, se describen algunos de los principales procesos de paz fallidos en ese período:

1. Proceso de Paz con el M-19 (1982-1989): El Movimiento 19 de abril (M-19) fue un grupo guerrillero que surgió tras las elecciones presidenciales de 1970. En 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se inició un proceso de diálogo con este grupo.

Aunque se firmó un cese al fuego en 1984, el proceso colapsó tras varios ataques de las FARC y del M-19. En particular, el asalto del M-19 al Palacio de Justicia en 1985, y la respuesta militar, llevaron a la ruptura de las negociaciones.

Finalmente, hubo una reinserción posterior, aunque fracasó en su etapa inicial, el M-19 se desmovilizó en 1990 bajo el gobierno de Virgilio Barco, tras otro intento de negociación (Pécaut, 2000).

2. Proceso de Paz con las FARC (1982-1987): Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se entablaron conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que condujeron a la creación de la Unión Patriótica (UP) como un brazo político de las FARC.

A pesar del cese al fuego de 1984, el proceso se debilitó debido a la violencia generalizada contra los miembros de la UP (se estima que miles de ellos fueron asesinados por fuerzas paramilitares y sectores del Estado), lo que provocó que las FARC retomaran las armas. Para 1987, el proceso estaba completamente roto (Pécaut, 2000).

3. Proceso de Paz con el EPL y otros grupos (1984-1991): El Ejército Popular de Liberación (EPL) y otros grupos como el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y el Movimiento Quintín Lame, participaron en procesos de paz en la década de 1980 bajo los gobiernos de Betancur y Barco.

Aunque algunos de estos grupos se desmovilizaron exitosamente a finales de los 80 y principios de los 90, las negociaciones iniciales con el EPL se

complicaron debido a divisiones internas y ataques de facciones disidentes. Una parte del EPL continuó en la lucha armada tras la desmovilización.

4. Proceso de Paz con las FARC y el ELN en Tlaxcala (1991-1992): En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el gobierno de César Gaviria intentó avanzar en negociaciones con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de otros grupos como el EPL.

Las conversaciones en Tlaxcala, México, se rompieron cuando las FARC secuestraron a un exministro, y las condiciones de inseguridad en Colombia continuaron deteriorándose. Además, había desconfianza entre las partes y tensiones internas en el gobierno (Dudley, 2004).

5. Proceso de Paz del Caguán con las FARC (1999-2002): Durante el gobierno de Andrés Pastrana, se realizó uno de los intentos más ambiciosos de diálogo con las FARC. A las FARC se les otorgó una amplia zona desmilitarizada en San Vicente del Caguán, donde se llevaron a cabo las negociaciones. El proceso fracasó debido a que las FARC continuaron expandiendo sus actividades criminales, como secuestros y ataques armados, mientras las negociaciones seguían su curso. La falta de avances significativos y el aumento de la violencia llevaron al gobierno de Pastrana a suspender las conversaciones en 2002, tras lo cual las FARC reanudaron sus acciones armadas con mayor intensidad (Romero, 2011).

6. Proceso de Paz con el ELN (1998-2015): Durante los gobiernos de Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, hubo múltiples intentos de iniciar negociaciones con el ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia.

En el gobierno de Alvaro Uribe, particularmente, también se mantuvieron conversaciones sin éxito, lo que llevó al ELN a regresar al conflicto armado. Los fracasos se debieron a la continuación de la violencia y a las diferencias entre los miembros del ELN, lo que dificultó cualquier avance en las negociaciones. Incluso, la instalación de una mesa de diálogo en Quito se retrasó debido al secuestro de un civil por parte de un frente del ELN, a lo que el Gobierno respondió condicionando la negociación a la liberación del civil. Esto signó la desconfianza ante la falta de cese de hostilidades por parte del ELN y la insistencia del gobierno en el fin de los secuestros como condición previa hicieron que el proceso no prosperara (Nasi, 2009).

En 2014, durante el mandato de Juan Manuel Santos, se dio inicio a un nuevo esfuerzo de negociación entre la insurgencia del ELN y el Estado, logrando avanzar hacia una fase exploratoria. En el 2016, se anunció formalmente la apertura de las negociaciones entre el ELN y el Estado, presentándose una agenda compuesta por seis puntos, de los cuales tres se enfocaban en la participación de la sociedad: 1) Participación de la sociedad en la

construcción de paz, 2) Democracia para la paz, 3) Transformaciones para la paz, 4) Víctimas, 5) Fin del conflicto, y 6) Implementación de los acuerdos (Los puntos de la agenda en el proceso de paz con el ELN, 2016).²

En 2018, con la llegada de Iván Duque a la presidencia (2018-2022), el proceso iniciado bajo Juan Manuel Santos fue congelado y comenzó a enfrentar diversos obstáculos y dificultades. Finalmente, en 2019 se decidió suspenderlo tras el ataque con un carro bomba perpetrado por el ELN en la Escuela General Santander del Ejército (Insuasty-Rodríguez et al., 2023).

7. Procesos con los Paramilitares (1994-2006): Aunque se suele hablar del proceso con los grupos paramilitares bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2003-2006), hubo intentos anteriores para desmovilizarlos. Uno de los más notables fue en 1994, bajo el gobierno de Ernesto Samper, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ofrecieron negociar una desmovilización parcial.

Los esfuerzos por negociar con las AUC en los años 90 fracasaron debido a la escalada de violencia y la fragmentación interna de estos grupos. Incluso en el proceso de desmovilización de 2003-2006, muchas facciones se rearmaron o se transformaron en grupos criminales, como las “Bandas Criminales” (Bacrim), lo que evidenció el carácter incompleto de ese proceso (Nasi, 2009).

Estos fracasos reflejan la complejidad del conflicto armado colombiano, que involucra múltiples actores, intereses y dinámicas cambiantes. Los intentos de paz fueron frustrados por la continuidad de la violencia, la falta de confianza entre las partes, y los intereses políticos y económicos tanto dentro como fuera del conflicto. Sin embargo, estos procesos fallidos también sentaron las bases para los acuerdos de paz de 2016, espacio que permitió aplicar las lecciones aprendidas.

La etapa de implementación de la Paz Total constituye un momento crucial que enfrenta diversos desafíos que son fundamentales para comprender su desarrollo. En primer lugar, destaca la novedosa apuesta por mantener diálogos simultáneos con todos los grupos armados, una iniciativa que responde a demandas históricas de las comunidades más afectadas por la violencia. Esta estrategia se ve complicada por el deterioro de las condiciones de seguridad durante la fase inicial de implementación del acuerdo de paz, lo que ha llevado a la sociedad civil a exigir la reconfiguración del modelo de paz para incluir a todos los actores del conflicto. Además, es importante destacar que la política de Paz Total aborda de manera integral los contextos urbanos y su relación con las dinámicas de criminalidad y violencia en todo el territorio colombiano. Esta inclusión reconoce la complejidad de los desafíos de seguridad en entornos urbanos y busca abordarlos de manera efectiva dentro del marco de la paz nacional (Preciado, 2023).

2 Semana. <https://www.semana.com/nacion/articulo/los-puntos-de-la-agenda-en-el-proceso-de-paz-con-el-eln/476007/>

Se pueden identificar varios desafíos importantes en este contexto. En primer lugar, todos los actores armados llegan a la mesa de diálogo con un nivel significativo de fortalecimiento, expansión y consolidación. No se encuentran derrotados militar, política ni económicamente, y no perciben al Estado como una amenaza inminente, lo que les permite participar en las negociaciones con comodidad. Esta situación plantea un desafío importante, ya que la simultaneidad de los diálogos requiere una diferenciación de los conflictos según el actor, el territorio y los impactos, algo que se ve afectado por la falta de planificación (Shuldiner & Loaiza, 2023).

Además, la reducción de la estrategia militar por parte del Estado debilita su presión sobre los grupos armados. La falta de una acción militar o persecución judicial contundente no proporciona incentivos suficientes para que los grupos se sienten a negociar, ya que pueden percibirse a sí mismos como beneficiados por la situación actual. Esta dinámica plantea un desafío adicional para el proceso de paz, ya que dificulta el logro de compromisos significativos por parte de todos los actores involucrados (Shuldiner & Loaiza, 2023).

Después de un año y medio de implementación, esto es, a agosto de 2024, es factible realizar una evaluación inicial de la política de Paz y su ejecución. El año 2022 se destacó por ser uno de los más violentos, sin embargo, los acercamientos y negociaciones propuestas contribuyeron a mejorar algunas variables de la confrontación, aunque las cifras siguen siendo preocupantes (García, 2023). El cambio de enfoque propuesto por la paz en la visión de seguridad y defensa ha impactado la capacidad operativa del Estado. Entre agosto de 2022 y julio de 2023, se observó una reducción en las acciones de la fuerza pública, como los combates contra los grupos armados, marcando el período con menos registros desde 2016 (García, 2023).

Este fenómeno se atribuye al “efecto rebote”, que se relaciona con la fase inicial denominada “alistamiento”. Durante este período, que coincide con el inicio del gobierno de Petro y la expedición de la ley 2272 para iniciar la fase exploratoria de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se experimentó una disminución en las acciones de confrontación. Sin embargo, este efecto rebote plantea desafíos adicionales a medida que se avanza en la fase de implementación hasta la fecha actual (Preciado, 2023).

El balance refleja que, durante la primera fase, conocida como “alistamiento”, las expectativas generaron un impacto positivo en la reducción de la violencia. Sin embargo, este efecto se revirtió durante la implementación, con un aumento del 71% en las acciones de los grupos armados. A nivel global, las cifras muestran un incremento significativo de los enfrentamientos entre agosto de 2022 y junio de 2023, duplicando los registros de los dos períodos anteriores y manteniendo una tendencia al alza (García, 2023).

En cuanto a la consolidación territorial y la expansión de los grupos armados, los acercamientos se han producido en medio de un fortalecimiento progresivo, especialmente notable en los últimos dos años. Estos actores ilegales han aprovechado la coyuntura actual para expandir sus territorios y fortalecer su base económica, lo que ha redefinido las relaciones entre grupos en varias zonas del país y ha dado lugar a nuevos escenarios de disputa territorial.

Como es común en las negociaciones, los grupos buscan demostrar su fuerza y control territorial, lo que impacta directamente en la percepción de seguridad. Esta dinámica añade complejidad al proceso de paz y resalta la necesidad de abordar de manera integral tanto las causas subyacentes del conflicto como los desafíos en la implementación de los acuerdos.

En el año 2023, la política de Paz Total enfrentó un año desafiante. Aparte de distanciarse de su objetivo de persuadir a los grupos armados más significativos del país para que abandonen las armas, provocó una reestructuración del panorama criminal en Colombia. Durante ese año, solo cinco grupos lograron entablar negociaciones activas con el gobierno. Los procesos de paz más avanzados hasta la fecha son aquellos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de las ex-FARC, una coalición de grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (García, 2023).

Es crucial reconocer que las negociaciones han logrado acuerdos de cese al fuego con el Estado y la instalación de mesas de diálogo que han llevado a una reducción significativa de los enfrentamientos con la fuerza pública en todo el país. Sin embargo, las circunstancias de las demás negociaciones son inciertas. Uno de los principales desafíos radica en que los grupos criminales carecen de un marco legal para su sometimiento a la justicia, ya que el proyecto de ley presentado por el gobierno con este fin fue rechazado en el Congreso.³ Esto evidencia una pérdida de capital político por parte del gobierno en el legislativo y muestra que la ciudadanía en general no está muy conforme con las negociaciones.

Así pues, en el año 2023, la implementación de la Paz Total tuvo un impacto significativo en las principales economías criminales de Colombia, generando un efecto indeseado al impulsar una intensificación en la lucha por el control de estas economías estratégicas del país. El gobierno se encontró con las manos atadas en términos militares para actuar contra los grupos con los que había pactado ceses al fuego. Además, abandonar estas fuentes de ingresos no fue una condición necesaria para entablar el diálogo de paz.

En este contexto, algunos grupos, como el Estado Mayor Central (EMC), lograron consolidar corredores estratégicos en el Cauca y otras regiones del sur

3 Ver <https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/4379-gobierno-radi-co-proyecto-de-ley-de-sometimiento-a-la-justicia-para-bandas-criminales>

del país, lo que desencadenó enfrentamientos. En áreas dedicadas al cultivo de coca, la violencia se intensificó, exacerbando la crisis causada por la caída de los precios (Preciado, 2023).

Durante ese año, la política de Paz Total tuvo que enfrentarse y adaptarse a un entorno criminal difícil, convirtiéndose en uno de los factores principales que contribuyeron a la rápida evolución de la criminalidad en el país. Los ceses al fuego fueron cruciales para cambiar las dinámicas criminales, ya que los grupos ilegales se liberaron de la presión de los operativos militares en su contra, permitiéndoles enfocarse en la lucha contra organizaciones rivales por el control de territorios estratégicos.

Sin embargo, los ceses al fuego con el Estado se percibieron como “una tregua sin planificación”, dejando un espacio abierto para una guerra más horizontal entre grupos armados y criminales, sin la participación activa del Estado en la ecuación. De hecho, según datos de la Fundación Ideas para la Paz, la confrontación entre grupos armados aumentó en un 85% y se expandió a otras zonas del país en el contexto de la implementación de la Paz Total.

A pesar de que en 2023 la implementación de la Paz Total se vio obstaculizada por las cambiantes dinámicas criminales del país, se registraron algunos avances positivos en los indicadores de seguridad, como una ligera disminución en los asesinatos de líderes sociales y cifras más bajas de desplazamiento y confinamiento en comparación con años anteriores (Preciado, 2023).

Sin embargo, la Paz Total no logró evitar el fortalecimiento de los principales grupos criminales ni frenar sus planes de expansión territorial, su capacidad de reclutamiento o la diversificación de sus ingresos. Además, persistieron los fuertes enfrentamientos entre grupos por el control de territorios estratégicos para el crimen organizado.

En este sentido, se puede concluir preliminarmente que la política de Paz Total enfrenta desafíos significativos debido a la falta de un método claro en el diálogo y a la ausencia de líneas rojas establecidas por parte del Estado. Al incluir a todos los actores de la violencia armada en un mismo grupo, sin considerar las diferencias en sus orígenes y modus operandi, se dificulta la efectividad de las negociaciones.

Es importante destacar que mientras las negociaciones de paz con organizaciones insurgentes tienen una naturaleza política y una larga historia de diálogos, el diálogo con organizaciones criminales es menos político y requiere negociaciones con cabecillas de organizaciones que suelen experimentar cambios frecuentes en su liderazgo. Esto demuestra la necesidad de un enfoque más amplio y flexible que tenga en cuenta la diversidad de organizaciones y sus múltiples objetivos económicos e intereses.

Además, es fundamental considerar el marco legal establecido por el Acto Legislativo 01 de 2017, en cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, que garantiza verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. Sin embargo, no está claro cómo se aplicará este marco legal en el contexto de los diálogos con las organizaciones criminales, lo que representa otro desafío para la implementación efectiva de la Paz Total (Preciado, 2023).

Es plausible considerar que la Paz Total resultará en una paz parcial por diversas razones. En 2023, la Corte Constitucional Colombiana determinó que el gobierno solo puede entablar negociaciones de paz con grupos armados de naturaleza política y no con organizaciones criminales. Este dictamen cambia drásticamente el panorama para estas últimas, ya que las penas, inmunidades y representación política quedan en una zona gris legal.

Es importante destacar que los grupos armados se han fortalecido en algunas áreas del país, aumentando su control territorial. El año 2023 experimentó una disminución en los indicadores de impacto y afectación humanitaria, lo cual puede atribuirse al proceso de consolidación del control social y territorial ejercido por estos grupos. Sin embargo, en algunas regiones donde los grupos armados tienen influencia, se cuestiona el monopolio estatal sobre la fuerza y la justicia, como en el caso del Meta con el Estado Mayor Central (EMC).

Además, durante el último año, se han intensificado las zonas de disputa entre los grupos armados, lo que ha resultado en un aumento de las acciones violentas en estas áreas. Se han observado alianzas entre distintos grupos con el fin de expandirse y controlar territorios estratégicos. Por ejemplo, en Antioquia, el EMC y el ELN se han asociado para hacer frente al Clan del Golfo, lo que demuestra la complejidad y dinámica cambiante del conflicto armado en Colombia.

A modo de cierre

Siete años después de la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, la política de Paz Total se configura como un esfuerzo ambicioso para la reconfiguración de la arquitectura de Paz colombiana. No obstante, como ha sido analizado a lo largo de este ensayo, la propuesta enfrenta cambios estructurales profundos que cuestionan su alcance. La hipótesis que sustenta este texto sugiere que la ausencia de una distinción clara entre actores políticamente movilizados y organizaciones criminales, sumado a la ausencia de un marco legal robusto y una estrategia de Estado integral, limitan significativamente la posibilidad de lograr una paz sostenible y transformadora.

Mas que una política unificada, la Paz Total ha funcionado como un paraguas conceptual que contiene diversos procesos con actores distintos, sin establecer

unas condiciones mínimas o unos términos claros para las negociaciones. Esto ha derivado en una implementación fragmentada, caracterizada por ceses al fuego desorganizados, una capacidad coercitiva del Estado disminuida y por la consolidación territorial de actores armados que no encuentran incentivos para desmovilizarse.

En este sentido, lo que ha sido construido hasta ahora puede ser descrito como una Paz Parcial: territorialmente desigual, políticamente ambigua y jurídicamente frágil. Esto no solo refleja las barreras históricas que han amenazado la Paz en Colombia, sino que revela la necesidad urgente de replantear la estrategia a través de una perspectiva más realista, diferenciada y legalmente asentada.

Únicamente a través de una reconfiguración de la estrategia que articule los enfoques diferenciados basados en los tipos de actores armados, que fortalezca el control institucional del Estado y que asegure la participación efectiva de las comunidades afectadas, será posible el tránsito hacia una Paz que no sea exclusivamente declarativa sino realmente transformadora.

Referencias

- Buendía, H. G. (2022). *Entre La Independencia y La Pandemia*. Rey Naranja Editores.
- Dudley, S. (2004). *Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in Colombia*. Routledge.
- García, M. M. (2023, 07 de noviembre). La ambición y la dificultad del objetivo de la ‘Paz Total’ en Colombia. Universidad de Navarra. <https://n9.cl/kflkk>
- Gobierno Nacional. (2023). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026*. Potencia Mundial de la Vida.
- Insuasty-Rodríguez, A., Vallejo Duque, Y., & Valencia-Grajales, J. F. (2023). Diálogos de paz con el ELN: Entre la esperanza y la desconfianza. *Revista Ratio Juris*, 18(37), 337-358. <https://doi.org/10.24142/raju.v18n37a12>
- Semana. (2016). Los puntos de la agenda en el proceso de paz con el ELN. <https://n9.cl/9u19oi>
- Nasi, C. (2009). *Cuando callan los fusiles: Impacto de los procesos de paz sobre la violencia y la política en Colombia*. Universidad de los Andes.
- Pardo, R. (2004). *La Historia de las Guerras*. Editorial Aguilar.
- Pécaut, D. (2000). *Crónica de cuatro décadas de política colombiana: Violencia, política y sociedad*. Editorial Planeta.
- Preciado, A. (2023). *El camino de la Paz Total*. Global Initiative.

- Preciado, A. (2023, 14 de junio). Medellín: negociar la paz cuando no hay guerra. Fundación Ideas para la Paz. <https://n9.cl/rn8qk>
- Romero, M. (2011). ¿Por qué fracasó el proceso de paz en el Caguán? *Revista Colombiana de Sociología*, 33(2), 179-204.
- Shuldiner, H., & Loaiza, L. (2023, 07 de noviembre). La Paz Total de Colombia se desmorona. Insight Crime. <https://n9.cl/v026ip>

From the 2016 peace accords to total peace in Colombia: Some reflections seven years later

Dos acordos de paz de 2016 à paz total na Colômbia: algumas reflexões sete anos depois

Ivonne Téllez Patarroyo

Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Quito | Ecuador

<https://orcid.org/0000-0003-0562-9062>

ltellez783@puce.edu.ec

fustercita@gmail.com

PhD (c) en Derecho de la Universidad de Buenos Aires UBA, LLM Master en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow, Reino Unido, Alumni 2019 y 2023 de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Países Bajos, Fellow del Programa de Derecho Internacional de Naciones Unidas 2023 y abogada de Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia.

Abstract

Total Peace is a political proposal and constitutes one of the pillars of the current Colombian government's strategy (2024). It is one of the transformative axes aimed at moving toward a secure society within the framework of a stable and lasting peace, with guarantees of non-repetition. Total Peace is based on Human Security, which asserts that security comprises social, economic, cultural, and state security policies that provide survival and dignity to the entire population under equal conditions. This strategy is an unprecedented objective in Colombia, as it seeks to bring all illegal armed actors into a space of direct and transformative dialogue. This security strategy establishes two paths: negotiation and submission to justice for dissidents, as well as the implementation of the 2016 Peace Agreements. However, the implementation of Total Peace remains unclear due to resistance from certain population sectors and a planning process that lacks full transparency. Despite some positive progress, insecurity continues to persist in several regions. Given this scenario, it is necessary to reflect on the content of the proposal, its progress, and its challenges. To this end, this study employs a qualitative analysis of the identified variables.

Keywords: Colombia; Peace; Human Security; Peace Accords.

Resumo

A Paz Total é uma proposta política e constitui um dos pilares da estratégia do atual governo colombiano (2024). É um dos eixos de transformação que nos permitirá avançar em direção a uma sociedade segura, no âmbito de uma paz estável e duradoura, com garantias de não repetição. A Paz Total é baseada no conceito de Segurança Humana, que estabelece que a segurança é composta por políticas de segurança social, econômica, cultural e estatal que proporcionam sobrevivência e dignidade a toda a população em condições de igualdade. Essa estratégia é um objetivo nunca antes proposto na Colômbia, integrando todos os atores armados ilegais em um espaço de diálogo direto e transformador. Essa estratégia de segurança estabelece dois caminhos: a negociação e a sujeição à justiça com os dissidentes, bem como a implementação dos Acordos de Paz de 2016. No entanto, a implementação da Paz Total continua a ser obscurecida pela resistência de alguns setores da população, por um planejamento que não é totalmente claro e que, apesar dos avanços positivos, a atmosfera de insegurança permanece em

algumas regiões. Diante desse panorama, é necessário refletir sobre o conteúdo da proposta, os avanços alcançados e os desafios enfrentados. Para isso, este artigo utiliza uma análise qualitativa das variáveis identificadas.

Palavras-chave: Colômbia; Paz; segurança humana; Acordo de Paz.